



Junta de Transparencia y Ética Pública

Resolución N°292/2025 de 17 de julio del 2025

VISTO: el expediente No. 2023-34-1-0000086 referido a la denuncia anónima presentada con fecha 25 de abril de 2023 contra el ex Fiscal General de la Nación, Dr. Jorge Díaz, referente a su desempeño en un estudio jurídico, luego de la renuncia a su cargo en Fiscalía, violatorio a su entender, de lo dispuesto en el artículo 31 del Código de Ética de la Función Pública, Ley 19.823.

RESULTANDO: que, en informe letrado de fecha 26-06-2023, se propone consultar al Dr. Díaz en cuanto al contenido de la denuncia aludida, solicitando explicaciones acerca de su trabajo y alcance del mismo en el estudio jurídico de Costa, a quiénes representaba penalmente, si tomó medidas para evitar posible conflicto de intereses. Finalmente solicita que se informe fechas exactas en las que cesó en sus funciones como Fiscal de Corte y comenzó a trabajar en el ámbito particular, con el fin de determinar si se ha cumplido con el período de incompatibilidad establecido por ley, por lo que en definitiva la informante concluye, que si no se respetó el plazo de un año entre que cesó en un trabajo y comenzó el otro, se habría incumplido con lo dispuesto en el artículo 31 referido ut supra.

CONSIDERANDO: I) que este Directorio no comparte las conclusiones a las que se arriba en el citado informe, por los fundamentos que pasan a exponerse.

II) que el artículo 31 del Código de Ética de la Función Pública establece: *"Queda prohibido a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentren vinculados profesional, laboral o familiarmente o mediante*

cualquier otro vínculo del cual pueda derivar un conflicto entre el interés público y el privado.... Esta prohibición se mantendrá durante un año, luego de que el funcionario respectivo haya cesado en sus funciones." La prohibición se extiende a contrataciones de obras o servicios, solicitadas por una Administración y realizadas por organismos internacionales o proyectos ejecutados por terceros.

III) que la norma invocada, busca prevenir conflictos de interés en la función pública, asegurando que las decisiones de los funcionarios se basen en el interés público y no en beneficios personales o de terceros con los que tengan vínculos. El Dr. Jorge Rodríguez Pereira, define el conflicto de interés, como aquella situación en que el funcionario público tiene suficiente interés personal o privado, por lo que el ejercicio de sus funciones se ve influenciado. Afirma que el Estado protege el interés público, que es aquél que se vincula a las necesidades colectivas de los integrantes de la sociedad y no los intereses privados que se relacionan con las utilidades particulares del funcionario. Pero el requisito imprescindible para encontrarse en una situación de conflicto de intereses, es que la conducta sea desarrollada por un funcionario público y el bien protegido en estos casos, es la buena marcha de la Administración Pública.

IV) que en el caso del Dr. Jorge Díaz, al desarrollar las actividades inherentes a su profesión, ya no revestía la calidad de funcionario público y tampoco se evidencia que con dicha conducta pueda verse vulnerado el interés público o afectada la Administración.

V) que del trámite parlamentario surge, en relación al artículo 31 del Código de Ética, que se centró en la necesidad de fortalecer la transparencia y la ética en la función pública, así como en la importancia



Junta de Transparencia y Ética Pública

de evitar cualquier situación que pueda comprometer la imparcialidad y objetividad de los funcionarios, elementos que no se observan atacados por el ejercicio liberal de la profesión.

VI) La Ley Orgánica de Fiscalía General de la Nación, Ley 19.483 de 5-01-2017, en su artículo 50 establece las incompatibilidades para los fiscales: “... *el ejercicio profesional, remunerado o no ... el desarrollo de actividades industriales, comerciales o agropecuarias...*”. Pero esta incompatibilidad la acota al período en que se desempeña el cargo y en consecuencia, no proyecta el alcance de la misma una vez cesado en el cargo.

VII) En ocasión de la discusión de la Ley de Rendición de Cuentas, octubre de 2023, se debatió acerca de la incorporación de un artículo que establecía restricciones al ejercicio de la profesión, una vez cesada la actividad en Fiscalía. Para el Fiscal de Corte y su adjunto se preveía que no podrían desempeñarse como abogados por el plazo de tres años desde que cesaran su actividad y para los fiscales con competencia en materia penal, esta inhibición la restringían a un año. Este proyecto, que finalmente no resultó aprobado, trajo aparejado que la Ley Orgánica de Fiscalía no sufriera modificaciones, por lo que rige al respecto únicamente la incompatibilidad señalada, solo durante el ejercicio de la función.

VIII) Si se hubiera entendido que en relación a los Fiscales que cesan su actividad en el servicio descentralizado, aplicara lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 31, no habría tenido lugar la discusión parlamentaria tendiente a inhibir el ejercicio profesional una vez cesada la actividad en Fiscalía. Bastaba con extender el plazo estipulado en el

artículo 31. De entender igualmente, que el Dr. Díaz con su actividad particular, estaba violentando la norma citada, cualquier Fiscal actuando de oficio, podría haberlo señalado, ya que la actividad particular del Dr. Díaz en el ejercicio de su profesión, era pública y notoria. En efecto, el propio Díaz, en varias declaraciones de prensa afirmó que iba a dedicarse a la actividad privada, por lo que si Fiscalía entendía que le era aplicable el inc. 3 del art. 31 del Código de Ética y que debía respetarse el plazo de un año, antes de comenzar a ejercer su profesión, debió haberlo señalado, actuando de oficio.

IX) Impedir al denunciado desempeñar su profesión, sin norma clara que lo establezca, atenta contra el derecho al trabajo, de raigambre constitucional, el que solo puede ser limitado por razones de interés general. Así lo establecen los arts. 7 y 36 de la Constitución de la República: Art. 7: *“Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general.”*. Art. 36: *“Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes.”* La prohibición de ejercer determinada profesión, en el caso de obrados ejercer la abogacía, debería estar dispuesta a texto explícito y solo invocando razones de interés general.

X) En Uruguay para poder ejercer una profesión, se debe poseer título expedido por la Universidad de la República, universidades privadas habilitadas o título revalidado si hubiera sido expedido en el extranjero. En el caso del Dr. Díaz, el mismo cuenta con la formación de abogado y título habilitante y no existe disposición normativa vigente, que



Junta de Transparencia y Ética Pública

impida o restrinja el derecho fundamental a ejercer su profesión, una vez que el mismo cesa su actividad como Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por las normas citadas;

EL DIRECTORIO DE LA JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

RESUELVE:

Archivar la presente/denuncia,

Firmado por:

Presidente Dra. Ana María Ferraris

Vicepresidente Cr. Alfredo Asti